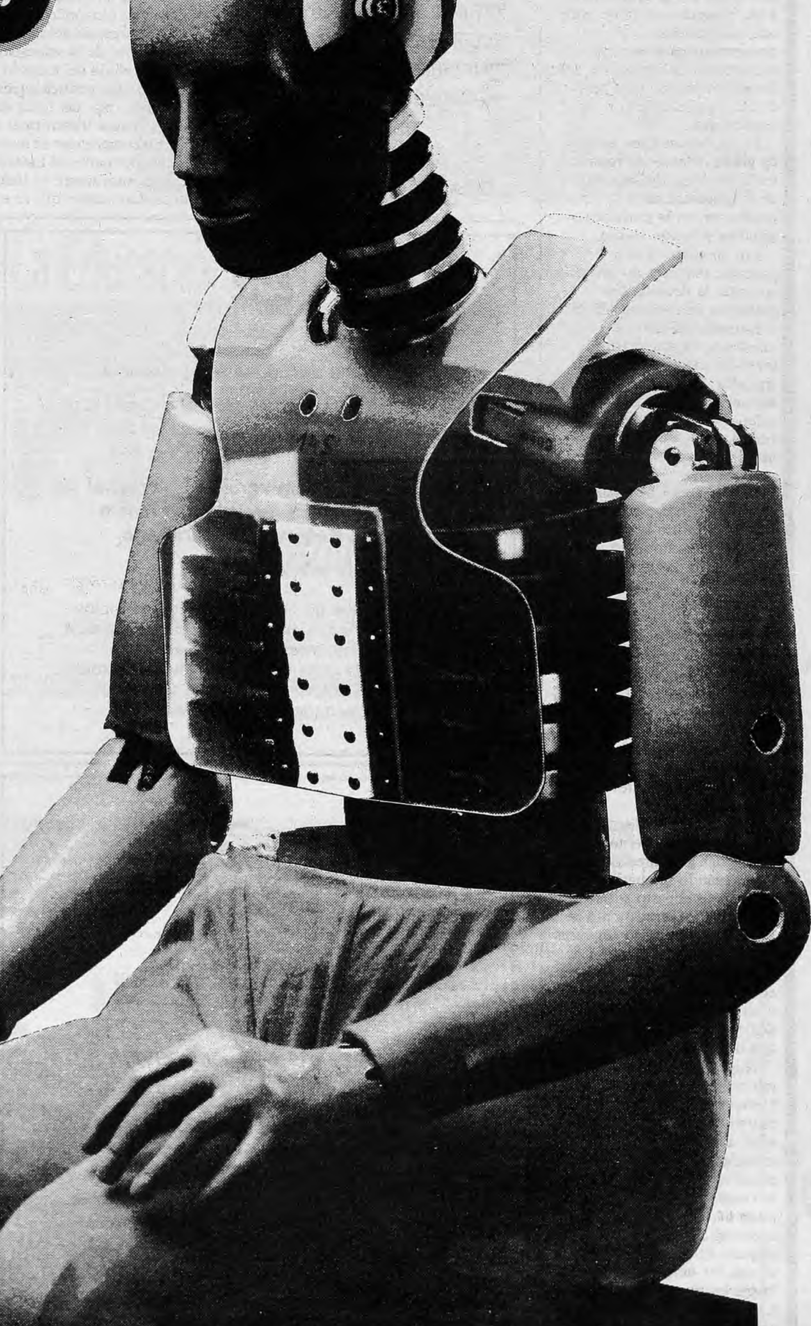
A 74 años de la revuelta cordobesa, la caída presupuestaria cierra las puertas a su actualización

LA REFORMA SIN FUTURO



En un nuevo aniversario de la rebelión estudiantil cordobesa que sacudió el oscurantismo clerical de los claustros, desterró los nombramientos a dedo o por "leva hereditaria" de los profesores, permitió la participación de los alumnos en el cogobierno y consagró la autonomía, se dividen las aguas a la hora de defender la vigencia de la Reforma Universitaria de 1918. Herederos de aquellos jóvenes radicales, socialistas y anarquistas que, al amparo del yrigoyenismo impusieron aquellos cambios, los universitarios miran con desconfianza la política del Gobierno. La desinversión que viene sufriendo la educación en los últimos años, el deseo y la decisión oficial de aumentar los aportes del sector privado, y el insostenible declive de los salarios de profesores e investigadores alimentan las sospechas. En estas páginas, los reformistas aceptan la necesidad de actualizar el modelo, pero descreen de la posibilidad de hacerlo "sin el aumento del financiamiento estatal". Los usuarios indirectos del sistema educativo, los padres de futuros estudiantes terciarios, rescatan el protagonismo del Estado en la educación.
Dos posturas que parecen ir a contramano de los preceptos imperantes en el mercado pero que, sin embargo, siguen cosechando la mayoría entre los universitarios.



Por Ariel Rodríguez*

La contrarreforma

La mejor manera de recordar el 74° aniversario de la reforma es defendiéndola de esta nueva vuelta de tuerca que el Gobierno está dando con el régimen económico y financiero recientemente enviado al Congreso.

Decir que este proyecto es la contrarreforma universitaria no es sino poner las cosas en su lugar, ¿no? Veamos:

1.- El ministerio, se reservará por lo menos el 20 por ciento del presupuesto total para incidir directamente sobre las universidades, un 10 por ciento para definir las políticas de investigación (una suerte de CONICET ministerial) y otro 10 por ciento para premiar a las que hagan el ajuste y castigar a las que no. El ministro Salonia, defendiendo la autonomía universitaria parece un zorro defendiendo ovejas.

2.- El otorgamiento a los consejos superiores de "amplias libertades" en la fijación de la política salarial del personal es una maniobra evidente para endosarle la responsabilidad a los consejos superiores para que, maniatados presupuestariamente y presionados políticamente, sean llevados a producir un proceso de achicamiento de la Universidad.

3.- El arancel a los estudios de grado, además de romper la tradición educativa argentina de la gratuidad de la enseñanza, en la practica no significa solución alguna.

Este proyecto es una pantalla. Por un lado pretende esconder la decisión del Gobierno de no aumentar el presupuesto de las universidades (un cuarto de la inversión media mundial) y trasladar hacia el interior de las universidades los conflictos salariales y de distinto tipo que surjan como consecuencia de la asfixia presupuestaria; y por el otro intenta quebrar la solidaridad intrauniversitaria, de modo tal que en el futuro la discusión sea docentes contra estudiantes o contra no docentes, todos contra todos disputando un presupuesto que no alcanza.

El mensaje que da es claro: más presupuesto no hay, para aumentar los sueldos o los gastos de funcionamiento, cesanteen personal u arancelen o las dos cosas juntas.

He aquí, la contrarreforma, una Universidad achicada, sin equipos de investigación, elitizada, fuertemente corporativizada.

Sin dudarlo, la discusión de fondo que el Gobierno no quiere dar gira alrededor de hasta cuándo se continuará recortando el gasto social en la Argentina. Mientras tanto se siguen malvendiendo empresas con el pretexto de atender la salud y la educación o pagarle el 82 por ciento a los jubilados y un profesor titular con dedicación exclusiva gana lo que un sargento.

Hoy, seguimos reivindicando y recreando la Universidad democrática y pluralista; la excelencia en el nivel académico y en la investigación científica y tecnológica; y la gratuidad de la enseñanza. Estos principios pusieron a la Universidad argentina a la altura de las mejores del mundo y le dieron al país los únicos tres premios Nobel en ciencia de toda Latinoamérica.

** Presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).*

La caída presupuestaria impide cualquier reforma

SOMBRAS NAD

A 74 años del movimiento reformista de 1918, la Universidad enfrenta la necesidad de una nueva reforma condicionada por las exigencias del ajuste económico. Mientras el Banco Mundial señala la insuficiencia de los sistemas actuales de financiación y reclama el aporte "de las unidades familiares", los que enfrentan el criterio de la formación universitaria de acuerdo con los reclamos del mercado destacan que "ningún país del mundo puede fundar su crecimiento en la desinversión educativa".

"El mundo está enfermo de incredulidad y correlativamente de feroces dogmatismos, y la educación no puede ser ajena a estos padecimientos, pues, en desdichada dialéctica es su raíz y su consecuencia... Evitemos, pues, el error de reformar la educación como si se tratara de un problema meramente técnico y no el resultado de la concepción del hombre que le sirve de fundamento."

ERNESTO SABATO ("Educación y Crisis del Hombre")

(Por Nora Veiras) El movimiento reformista de 1918 definió un modelo universitario democrático y científico que se extendió a gran parte de Latinoamérica. Hoy, setenta y cuatro años después, ya no tiene que enfrentar el oscurantismo clerical, pero sí se ve obligado a encarar una nueva reforma. Las exigencias del ajuste económico tiñen y condicionan la urgencia del cambio. El financiamiento de la educación pública está en el ojo del huracán y es sacudido por una política regida, sin excepciones, por las leyes del mercado. ¿Se puede transformar el sistema sin un compromiso de inversión creciente por parte del Estado? es la pregunta subyacente en todos los planteos. Las señales que se envían desde el Gobierno y los consejos de los "asesores" externos no permiten ser demasiado optimistas.

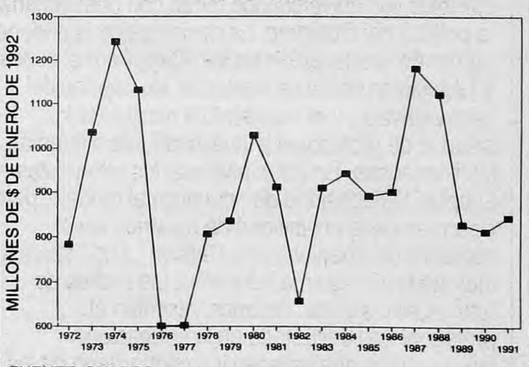
"Los sistemas actuales de financiación limitan la posible aprontación de las unidades familiares. El resultado es que la inversión en educación es insuficiente y no se aprovecha la disposición de las unidades familiares a pagar por la educación." Sin medias tintas, el Banco Mundial recomendaba en 1986 esta propuesta como opción de política del sostenimiento de la educación. La decisión de compensar la disminución de los aportes fiscales con el flujo de fondos privados no se agotaría en el nivel superior. "Al aumentar la recuperación de los costos en la educación superior y posiblemente la secundaria, aumentaría también el total de los recursos (públicos y privados) de la economía para fines de educación. Al mismo tiempo, esto permitiría una reasignación del gasto público que favoreciera a los niveles y tipos de educación socialmente más rentables. La orientación hacia un mayor volumen de financiación privada haría mejorar la calidad de la selección y el desempeño de los estudiantes, al tener éstos un mayor interés financiero en sus estudios", postulaban los expertos.

La visión de la formación universitaria como un beneficio individual que debe ser pagado "como cualquier otro producto del mercado" es, en realidad, el nudo del enfrentamiento con quienes, desde los claustros, bregan por la necesidad de aumentar la inversión. "Ningún país del mundo puede fundar su crecimiento en la desinversión educativa, científica y tecnológica", argumentan. La comparación con la situación de otros países del ansiado Primer Mundo, y aun de los que pujan por salir de la marginación tercermundista, sirve para confrontar los límites del ajuste. En la Argentina, el presupuesto universitario por estudiante es de 1000 pesos por año, mientras que en España, Francia, México y Brasil oscila entre los 2500 y los 5000 pesos para el mismo lapso. Otro dato, evaluado por la UNESCO (1989), para comprender el peso del conocimiento es la cantidad de investigadores e ingenieros por millón de habitantes. Japón está a la cabeza con 4800 científicos, Estados Unidos tiene 3400, Alemania Federal 2600, Italia 1200, Corea 1100, España 500 y Argentina apenas 350.

Del dicho al hecho

El discurso oficial —plasmado en

GRAFICO I



FUENTE: CUADRO I

Opinión

Por Ariel Rodríguez*

La contrarreforma

La mejor manera de recordar el 74° aniversario de la reforma es defendiéndola de esta nueva vuelta de tuerca que el Gobierno está dando con el régimen económico y financiero recientemente enviado al Congreso.

Decir que este proyecto es la contrarreforma universitaria no es sino poner las cosas en su lugar, ¿no? Veamos:

1.- El ministerio, se reservará por lo menos el 20 por ciento del presupuesto total para incidir directamente sobre las universidades, un 10 por ciento para definir las políticas de investigación (una suerte de CONICET ministerial) y otro 10 por ciento para premiar a las que hagan el ajuste y castigar a las que no. El ministro Salonia, defendiendo la autonomía universitaria parece un zorro defendiendo ovejas.

2.- El otorgamiento a los consejos superiores de "amplias libertades" en la fijación de la política salarial del personal es una maniobra evidente para endosarle la responsabilidad a los consejos superiores para que, maniatados presupuestariamente y presionados políticamente, sean llevados a producir un proceso de achicamiento de la Universidad.

3.- El arancel a los estudios de grado, además de romper la tradición educativa argentina de la gratuidad de la enseñanza, en la practica no significa solución alguna.

Este proyecto es una pantalla. Por un lado pretende esconder la decisión del Gobierno de no aumentar el presupuesto de las universidades (un cuarto de la inversión media mundial) y trasladar hacia el interior de las universidades los conflictos salariales y de distinto tipo que surjan como consecuencia de la asfixia presupuestaria ; y por el otro intenta quebrar la solidaridad intrauniversitaria, de modo tal que en el futuro la discusión sea docentes contra estudiantes o contra no docentes, todos contra todos disputando un presupuesto que no alcanza.

El mensaje que da es claro: más presupuesto no hay, para aumentar los sueldos o los gastos de funcionamiento, cesanteen personal u arancelen o las dos cosas juntas.

He aquí, la contrarreforma, una Universidad achicada, sin equipos de investigación, elitizada, fuertemente corporativizada.

Sin dudarlo, la discusión de fondo que el Gobierno no quiere dar gira alrededor de hasta cuándo se continuará recortando el gasto social en la Argentina. Mientras tanto se siguen malvendiendo empresas con el pretexto de atender la salud y la educación o pagarle el 82 por ciento a los jubilados y un profesor titular con dedicación exclusiva gana lo que un sargento.

Hoy, seguimos reivindicando y recreando la Universidad democrática y pluralista; la excelencia en el nivel académico y en la investigación científica y tecnológica; y la gratuidad de la enseñanza. Estos principios pusieron a la Universidad argentina a la altura de las mejores del mundo y le dieron al país los únicos tres premios Nobel en ciencia de toda Latinoamérica.

** Presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).*

La caída presupuestaria impide cualquier reforma en la Universidad

SOMBRAS NADA MAS

A 74 años del movimiento reformista de 1918, la Universidad enfrenta la necesidad de una nueva reforma condicionada por las exigencias del ajuste económico. Mientras el Banco Mundial señala la insuficiencia de los sistemas actuales de financiación y reclama el aporte "de las unidades familiares", los que enfrentan el criterio de la formación universitaria de acuerdo con los reclamos del mercado destacan que "ningún país del mundo puede fundar su crecimiento en la desinversión educativa".

"El mundo está enfermo de incredulidad y correlativamente de feroces dogmatismos, y la educación no puede ser ajena a estos padecimientos, pues, en desdichada dialéctica es su raíz y su consecuencia... Evitemos, pues, el error de reformar la educación como si se tratara de un problema meramente técnico y no el resultado de la concepción del hombre que le sirve de fundamento."

ERNESTO SABATO ("Educación y Crisis del Hombre")

(Por Nora Veiras) El movimiento reformista de 1918 definió un modelo universitario democrático y científico que se extendió a gran parte de Latinoamérica. Hoy, setenta y cuatro años después, ya no tiene que enfrentar el oscurantismo clerical, pero sí se ve obligado a encarar una nueva reforma. Las exigencias del ajuste económico tiñen y condicionan la urgencia del cambio. El financiamiento de la educación pública está en el ojo del huracán y es sacudido por una política regida, sin excepciones, por las leyes del mercado. ¿Se puede transformar el sistema sin un compromiso de inversión creciente por parte del Estado? es la pregunta subyacente en todos los planteos. Las señales que se envían desde el Gobierno y los consejos de los "asesores" externos no permiten ser demasiado optimistas.

"Los sistemas actuales de financiación limitan la posible aprontación de las unidades familiares. El resultado es que la inversión en educación es insuficiente y no se aprovecha la disposición de las unidades familiares a pagar por la educación." Sin medias tintas, el Banco Mundial recomendaba en 1986 esta propuesta como opción de política del sostenimiento de la educación. La decisión de compensar la disminución de los aportes fiscales con el flujo de fondos privados no se agotaría en el nivel superior. "Al aumentar la recuperación de los costos en la educación superior y posiblemente la secundaria, aumentaría también el total de los recursos (públicos y privados) de la economía para fines de educación. Al mismo tiempo, esto permitiría una reasignación del gasto público que favoreciera a los niveles y tipos de educación socialmente más rentables. La orientación hacia un mayor volumen de financiación privada haría mejorar la calidad de la selección y el desempeño de los estudiantes, al tener éstos un mayor interés financiero en sus estudios", postulaban los expertos.

La visión de la formación universitaria como un beneficio individual que debe ser pagado "como cualquier otro producto del mercado" es, en realidad, el nudo del enfrentamiento con quienes, desde los claustros, bregan por la necesidad de aumentar la inversión. "Ningún país del mundo puede fundar su crecimiento en la desinversión educativa, científica y tecnológica", argumentan. La comparación con la situación de otros países del ansiado Primer Mundo, y aun de los que pujan por salir de la marginación tercermundista, sirve para confrontar los límites del ajuste. En la Argentina, el presupuesto universitario por estudiante es de 1000 pesos por año, mientras que en España, Francia, México y Brasil oscila entre los 2500 y los 5000 pesos para el mismo lapso. Otro dato, evaluado por la UNESCO (1989), para comprender el peso del conocimiento es la cantidad de investigadores e ingenieros por millón de habitantes. Japón está a la cabeza con 4800 científicos, Estados Unidos tiene 3400, Alemania Federal 2600, Italia 1200, Corea 1100, España 500 y Argentina apenas 350.

Del dicho al hecho

El discurso oficial —plasmado en el Protocolo de Concertación Universitaria, firmado por los rectores y el presidente Carlos Menem en junio del '90— desmiente todo intento de achicamiento o reducción de los porcentajes asignados a la formación superior. El análisis de los números, sin embargo, hace desvanecer las promesas. El 90 por ciento de las partidas asignadas a las casas de altos estudios oficiales se destina al pago de salarios: para recuperar el nivel de haberes del '87 es necesario un incremento del 85 por ciento en la media de los sueldos docentes y del 200 por ciento en los de no docentes. Un investigador con dedicación exclusiva que accedió a su cargo por concurso recibe como retribución promedio 750 pesos, uno con dedicación semiexclusiva 280, mientras que un profesor con dedicación simple apenas redondea los 100 pesos. El deterioro es tan acentuado que no resiste la comparación ni siquiera con los países subdesarrollados. Dentro del sector de la administración pública, la educación ha soportado el mayor recorte en las retribuciones del personal, regla que se hizo extensiva a todos los niveles (primario, secundario y terciario) dependientes de la Nación. En los últimos días, la crisis se hizo sentir en el Instituto Félix Bernasconi, donde los maestros renunciaron masivamente, atraídos por los salarios municipales que duplican los 180 pesos congelados desde marzo del año pasado en la jurisdicción nacional.

En el trabajo *Políticas de Financiamiento y Gobierno de las Universidades Nacionales bajo un Régimen Democrático: Argentina 1983-1992*, realizado para el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Jorge Balán señala que la estabilidad económica a partir del Plan de Convertibilidad permitió "ya durante el '91 un incremento del presupuesto universitario sobre los niveles bajísimos del '90. La pauta del '92 deparó otra novedad importante: el Congreso aprobó el presupuesto nacional a comienzos del período —en lugar de hacerlo, como era habitual, cuando ya finalizaba— y fijó la partida correspondiente a las universidades nacionales en cerca de 800 millones de pesos . Esta cifra se aproxima a la del período 83-86, aunque su poder de compra en el mercado es sin duda mucho menor que entonces dada la actual tasa de cambio". Los rectores les solicitaron a los legisladores un refuerzo extra del 50 por ciento para "poder llegar a fin de año". Hasta el momento no hay novedades. Sin embargo, el asesor del ministro de Educación Antonio Salonia, José Luis de Imaz, anticipó en una nota publicada en *La Nación* la semana pasada que "el monto de 1992 parecería anticipar los de 1993 y 1994. De acuerdo con el memorándum de intención suscripto con el Fondo Monetario Internacional, el 5 de marzo pasado, el gasto público habrá de mantenerse constante en valores nominales —el 25,5 por ciento del PBI— supeditado en valores reales, a las variables decisorias: el dinamismo de la economía, la percepción fiscal, el mejor uso del gasto público".

El futuro

Después del vaciamiento y la persecución sufrida durante la última dictadura militar (el 25 por ciento de las listas de desaparecidos elaboradas por la CONADEP está cubierto por estudiantes y docentes universitarios), el gobierno democrático de Raúl Alfonsín retomó los principios de la Reforma del '18, que habían consagrado la época de oro de la educación superior entre 1959 y 1966. La realización de concursos docentes, el retorno de la investigación, el cogobierno, la autonomía, la gratuidad y el ingreso directo conformaron los pilares de la normalización de la vida de los claustros. Nueve años después, la lógica de la "racionalización del gasto público" está haciendo naufragar el modelo.

Los defensores a ultranza de aquellas ideas plasmadas por Deodoro Roca en el *Manifiesto Liminar* aceptan que es necesario un aggionarmiento. Insisten, sin embargo, en que "el ajuste salvaje producto del congelamiento de recursos para el sector está cristalizando un achicamiento que no pasa por la calidad sino porque 'los más capacitados se están yendo' ". La desconfianza se basa también en la vía libre que ha dado el Ejecutivo a la creación de universidades privadas. Desde 1974 no se habían otorgado autorizaciones, aunque la tendencia se revirtió durante la gestión de De Imaz al frente de la Dirección de Asuntos Universitarios cuando se crearon ocho casas de estudios, elevando a treinta y una la oferta particular.

A pesar de sus reparos sobre la conducción del sistema, Balán concluye en su estudio que "mientras la educación superior tenga tan baja prioridad dentro de la agenda política nacional, será difícil encarar su reforma. La experiencia de los últimos tres años parece indicar que ninguna tentativa de cambio puede ser encarada en el medio de un fuerte descenso del financiamiento, ya que la recuperación de los ingresos perdidos se vuelve omnipresente y tiñe el color del cristal con que se mira cualquier plan propuesto desde el Poder Ejecutivo".

No son pocos los rectores que todavía recuerdan las palabras de Menem al firmar el Protocolo de Concertación: "Sólo los universitarios salvarán a los universitarios", les dijo parafraseando al general Perón. Tres años después, más que un reconocimiento a la autonomía parece una forma elegante de desligarse del futuro de la investigación y el conocimiento en la universidad.



GRAFICO I

Aportes del Tesoro a las universidades nacionales 1972-1991

(Eje vertical: MILLONES DE $ DE ENERO DE 1992 — 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300; eje horizontal: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

FUENTE: CUADRO I

...a en la Universidad

...A MAS

el Protocolo de Concertación Universitaria, firmado por los rectores y el presidente Carlos Menem en junio del '90— desmiente todo intento de achicamiento o reducción de los porcentajes asignados a la formación superior. El análisis de los números, sin embargo, hace desvanecer las promesas. El 90 por ciento de las partidas asignadas a las casas de altos estudios oficiales se destina al pago de salarios: para recuperar el nivel de haberes del '87 es necesario un incremento del 85 por ciento en la media de los sueldos docentes y del 200 por ciento en los de no docentes. Un investigador con dedicación exclusiva que accedió a su cargo por concurso recibe como retribución promedio 750 pesos, uno con dedicación semiexclusiva 280, mientras que un profesor con dedicación simple apenas redondea los 100 pesos. El deterioro es tan acentuado que no resiste la comparación ni siquiera con los países subdesarrollados. Dentro del sector de la administración pública, la educación ha soportado el mayor recorte en las retribuciones del personal, regla que se hizo extensiva a todos los niveles (primario, secundario y terciario) dependientes de la Nación. En los últimos días, la crisis se hizo sentir en el Instituto Félix Bernasconi, donde los maestros renunciaron masivamente, atraídos por los salarios municipales que duplican los 180 pesos congelados desde marzo del año pasado en la jurisdicción nacional.

En el trabajo *Políticas de Financiamiento y Gobierno de las Universidades Nacionales bajo un Régimen Democrático: Argentina 1983-1992*, realizado para el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Jorge Balán señala que la estabilidad económica a partir del Plan de Convertibilidad permitió "ya durante el '91 un incremento del presupuesto universitario sobre los niveles bajísimos del '90. La pauta del '92 deparó otra novedad importante: el Congreso aprobó el presupuesto nacional a comienzos del período —en lugar de hacerlo, como era habitual, cuando ya finalizaba— y fijó la partida correspondiente a las universidades nacionales en cerca de 800 millones de pesos . Esta cifra se aproxima a la del período 83-86, aunque su poder de compra en el mercado es sin duda mucho menor que entonces dada la actual tasa de cambio". Los rectores les solicitaron a los legisladores un refuerzo extra del 50 por ciento para "poder llegar a fin de año". Hasta el momento no hay novedades. Sin embargo, el asesor del ministro de Educación Antonio Salonia, José Luis de Imaz, anticipó en una nota publicada en *La Nación* la semana pasada que "el monto de 1992 parecería anticipar los de 1993 y 1994. De acuerdo con el memorándum de intención suscripto con el Fondo Monetario Internacional, el 5 de marzo pasado, el gasto público habrá de mantenerse constante en valores nominales —el 25,5 por ciento del PBI— supeditado en valores reales, a las variables decisorias: el dinamismo de la economía, la percepción fiscal, el mejor uso del gasto público".

El futuro

Después del vaciamiento y la persecución sufrida durante la última dictadura militar (el 25 por ciento de las listas de desaparecidos elaboradas por la CONADEP está cubierto por estudiantes y docentes universitarios), el gobierno democrático de Raúl Alfonsín retomó los principios de la Reforma del '18, que habían consagrado la época de oro de la educación superior entre 1959 y 1966. La realización de concursos docentes, el retorno de la investigación, el cogobierno, la autonomía, la gratuidad y el ingreso directo conformaron los pilares de la normalización de la vida de los claustros. Nueve años después, la lógica de la "racionalización del gasto público" está haciendo naufragar el modelo. Los defensores a ultranza de aquellas ideas plasmadas por Deodoro Roca en el *Manifiesto Liminar* aceptan que es necesario un aggionarmiento. Insisten, sin embargo, en que "el ajuste salvaje producto del congelamiento de recursos para el sector está cristalizando un achicamiento que no pasa por la calidad sino porque 'los más capacitados se están yendo' ". La desconfianza se basa también en la vía libre que ha dado el Ejecutivo a la creación de universidades privadas. Desde 1974 no se habían otorgado autorizaciones, aunque la tendencia se revirtió durante la gestión de De Imaz al frente de la Dirección de Asuntos Universitarios cuando se crearon ocho casas de estudios, elevando a treinta y una la oferta particular.

A pesar de sus reparos sobre la conducción del sistema, Balán concluye en su estudio que "mientras la educación superior tenga tan baja prioridad dentro de la agenda política nacional, será difícil encarar su reforma. La experiencia de los últimos tres años parece indicar que ninguna tentativa de cambio puede ser encarada en el medio de un fuerte descenso del financiamiento, ya que la recuperación de los ingresos perdidos se vuelve omnipresente y tiñe el color del cristal con que se mira cualquier plan propuesto desde el Poder Ejecutivo".

No son pocos los rectores que todavía recuerdan las palabras de Menem al firmar el Protocolo de Concertación: "Sólo los universitarios salvarán a los universitarios", les dijo parafraseando al general Perón. Tres años después, más que un reconocimiento a la autonomía parece una forma elegante de desligarse del futuro de la investigación y el conocimiento en la universidad.



Qué quiere la gente de la educación

GRATIS, PERO LA MEJOR

El auge privatista enfrenta un inesperado escollo en el campo educativo. Una encuesta de Equas Consultores, dirigida por Enrique Zuleta, señala que el 64,1 por ciento de los padres piensa que la educación "debe estar principalmente en manos del Estado" mientras sólo el 13,7 por ciento defendió el protagonismo de la "iniciativa privada". Un escaso 10 por ciento asegura que la educación "se debe pagar".

La expansión del auge privatista tendrá que sortear más de una resistencia para legitimarse en el terreno educativo. La tradición estatal ha signado el aprendizaje de millones de argentinos desde que, a fines de 1880, se sancionara la ley 1420. A pesar del deterioro progresivo, el impacto sociocultural de una escuela primaria gratuita, laica y obligatoria y la consolidación de una prestigiosa universidad pública sigue pesando. Los beneficiarios indirectos del sistema, los padres, parecen todavía muy influidos por esa concepción que le otorgó al Estado el rol indelegable de sostener la educación. Por lo menos con esa sensación se quedaron los empresarios de IDEA, quienes encargaron un estudio de opinión sobre este trajinado tema.

Para saber con certeza qué está pensando la gente, Enrique Zuleta Puceiro dirigió un trabajo realizado por EQUAS Consultores (Esteban Lijalad-Eduardo Fidanza), en el cual se consultó a 397 padres y madres con hijos en escuelas primarias y secundarias porteñas. La muestra se dividió entre 266 encuestados con hijos en escuelas públicas y 131 en privadas. La proporción es representativa de la distribución de la matrícula.

Al ser consultados sobre si "la educación debe estar principalmente a cargo del Estado", el 64,1 por ciento se pronunció afirmativamente; sólo el 13,7 defendió el protagonismo de "la iniciativa privada" mientras que un 22,2 por ciento no supo qué contestar. La necesidad de que el Tesoro Nacional financie el proceso de enseñanza-aprendizaje trepa al 71,4 por ciento entre los padres con nivel económicosocial bajo, en la clase media cae por debajo de la media hasta el 59,2 por ciento y, llamativamente, sube hasta el 63,9 por ciento entre los sectores más pudientes.

La consideración de la educación como un bien por el cual no se debe pagar directamente está arraigado entre las familias porteñas. El 76,1 por ciento cree que "la educación (independientemente del nivel) debe ser gratuita"; sólo el 9,9 está dispuesto a confesar "que se debe pagar". La convicción de la gratuidad es muy fuerte en todas las franjas socioeconómicas: el 83,8 por ciento del nivel bajo, el 72,3 del medio y hasta el 70,6 del alto defiende este principio. No deja de llamar la atención que el 63,1 por ciento de aquellos que envían sus hijos a establecimientos privados se pronuncien por el no pago.

La oposición al arancelamiento se extiende también al nivel terciario. aunque con menos contundencia. El 42,9 cree que después del secundario, "la educación debe ser completamente gratuita" y el 22,2 se inclina por una contribución voluntaria. El pago de aranceles por capacidad contributiva fue elegido por el 21,4 por ciento, mientras que sólo el 8 por ciento estuvo de acuerdo con abonar cuotas "de acuerdo a costos reales". Al desglosar las preferencias por nivel económicosocial se aprecia que el 47,7 considera que no se debe pedir ningún dinero extra para financiar la educación; en el mismo sentido contestaron el 39,8 por ciento del nivel medio y el 41,8 del alto. Contrariando la práctica impositiva imperante, un tercio de la fracción de los más adinerados dijo estar de acuerdo con el pago por capacidad contributiva frente a un escaso 15,1 del nivel bajo. La fijación de cuotas "objetivas", es decir medidas en función de los costos, sedujo a muy pocos.

La disponibilidad de recursos para sostener la educación apareció como el problema central a la hora de detallar los "factores fundamentales para mejorar la educación". El 66,9 por ciento bregó "por más presupuesto", el 49,2 por nuevos métodos de enseñanza, el 31,9 por mejor salario para los docentes, el 20,2 por más compromiso por parte de los padres y apenas el 12 por ciento consideró que "la colaboración económica de los padres con la escuela" es necesaria para elevar el nivel de calidad educativa. El reclamo es unánime. Sin embargo, el sector alto parece ser el que más conciencia tiene sobre la urgencia de aumentar los fondos para el sector: el 75,7 bregó por "más presupuesto" al igual que el 65,5 de la clase media y baja. Las innovaciones didácticas ocuparon el segundo lugar gracias al fuerte reclamo en ese sentido del 51,9 por ciento de la franja de bajos recursos. El sector medio le dio a este rubro casi la misma significación, en cambio en el nivel alto la preocupación cayó casi diez puntos. La reacción frente a los haberes docentes también ofreció diferencias acordes al status de los encuestados: el 37,7 por ciento de los representantes de la clase baja acompañaron los reclamos del sector, la comprensión cayó al 28,8 entre los sectores medios y subió un punto entre los padres con excelente pasar económico.

En el caso de la educación, los reclamos de los dirigentes parecen sintonizar con lo que quieren los usuarios o beneficiarios del sistema. Más del 80 por ciento cree que los principales problemas de la educación en el país son el bajo presupuesto (34,5 por ciento), los magros sueldos de maestros y profesores (32,7 por ciento) y los programas y métodos desactualizados e irreales (25,2). Los dirigentes de Franja Morada, que vienen hegemonizando el liderazgo estudiantil desde el '83, se valen de estos datos de la realidad para fundar sus pedidos y defender su triunfo.



